

EL FIN DEL “OASIS”: EL CAMBIO POLÍTICO EN EL PACÍFICO SUDAMERICANO

Manuel Canelas*

31 de marzo de 2022

Resumen

Las victorias de Pedro Castillo en Perú y de Gabriel Boric en Chile han provocado que, desde algunos sectores, se considere como algo seguro la existencia de una segunda ola progresista en la región latinoamericana. Sin embargo, analizando un poco más de cerca ambos casos, esta afirmación se torna discutible. Los hechos electorales no parecen suficientes para determinar la orientación y las acciones posteriores de un gobierno. Lenin Moreno, Ollanta Humala o Juan Manuel Santos son ejemplos de que es necesario esperar algo más que pocos meses para sostener afirmaciones ideológicas rotundas. Asimismo, la relación con la izquierda bolivariana, en particular con Venezuela, y la problemática de la migración venezolana, son elementos a tomar en cuenta en el análisis.

Introducción

El ciclo progresista iniciado en el año 2000 empezó a mostrar duras señales de agotamiento desde hace unos seis años (2016); de hecho, varios países cambiaron —no siempre a través de la vía electoral— su orientación política y giraron hacia la derecha. Sin embargo, el fracaso de Mauricio Macri en la búsqueda de su reelección, la temprana caída de Pedro Pablo Kuczynski o las serias y sostenidas dificultades de Iván Duque, hicieron imposible que se hablase de un ciclo conservador en América Latina.

Desde 2020, la izquierda ha vuelto a gobernar en lugares en los que fue desplazada, como Argentina y Bolivia. Hay expec-

tativas serias de victoria de la izquierda en Colombia y en Brasil. El resultado de las últimas elecciones en Perú y Chile ha supuesto, para varios analistas y políticos, el arribo definitivo de un segundo ciclo progresista. Pero del mismo modo que para hablar de un ciclo conservador la mera coincidencia de victorias políticas de la derecha resultó insuficiente, tampoco, por ello, se puede sostener que la región viva un nuevo ciclo progresista.

Vamos a analizar el porqué de estas victorias en Chile y Perú, cómo se fue debilitando la hegemonía previa y de qué manera, tanto Gabriel Boric como Pedro Castillo, lograron construir las mayorías necesarias para alcanzar el gobierno. También pondremos una mirada más detallada en las orientaciones y las primeras acciones de estos proyectos. Consideramos que, si atendemos a todo esto, resulta más difícil realizar afirmaciones ideológi-

* Licenciado en Ciencias Políticas y máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Fue diputado, viceministro de Planificación y ministro de Comunicación en Bolivia durante la legislatura 2015-2020.



cas demasiado rotundas y tempranas. Por último, no hay que dejar de prestar atención al presente contexto regional: las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia, la migración venezolana o el debilitamiento de los espacios de toma decisiones compartidos.

Chile

Las dos figuras políticas chilenas más conocidas del siglo XX, el socialista Salvador Allende y el dictador Augusto Pinochet, representan muy bien los dos imaginarios que la élite política y cultural chilena construyó sobre Chile y su relación con la región. Estos imaginarios vuelven a estar en pugna hoy, en un Chile con una Convención Constitucional en curso y la victoria de Gabriel Boric. Allende, además de un símbolo de la “democracia popular”, es también el mayor referente chileno de la idea de hermandad latinoamericana, del anhelo de construcción de la “Patria Grande”. Por su parte, Pinochet, alumno disciplinado del experimento neoliberal en la región, elaboró, junto al apoyo de un cuerpo de economistas y políticos nacionales y extranjeros, sobre todo estadounidenses, la idea de Chile como excepción. La consideración de Chile como una excepción exitosa —comparte latitud, pero no carácter ni destino con los vecinos— llevó al país a darle la espalda a América del Sur. De hecho, la única colaboración relevante entre vecinos que se dio esos años fue la criminal política de la “Operación Cóndor”, de cierta manera un envés terrorífico de la idea de Patria Grande.

En buena parte de la clase política y la sociedad fue creciendo, con los años, la idea de Chile como un país profundamen-

te distinto, “serio” —quizás el único serio del lugar— y, por ello, con capacidad de hablar de tú a tú con países del llamado primer mundo. Mientras las dictaduras iban cayendo en el vecindario, Pinochet apostó por “abrirse al mundo” e intentar que la sistemática violación de los derechos humanos fuera desplazada por el discurso oficial del éxito económico de la excepción chilena. La recuperación de la democracia en Chile fue un trabajo arduo, y la resistencia de Pinochet y los suyos para no ser desplazados de los espacios de decisión fue tenaz; sin embargo, como suele pasar en los ciclos hegemónicos fuertes, las ideas que lograron primacía entonces siguieron siendo rectoras un tiempo mayor incluso al del mantenimiento del pinochetismo como mando político en el Estado. Esta fue una de las principales misiones de uno de los hombres más importantes del régimen de Pinochet, Jaime Guzmán, quien fue clave en la elaboración de la Constitución de 1980 y también fundó en 1983 el partido político Unión Demócrata Independiente (UDI), cuyo principal objetivo fue el de ser claro defensor de lo hecho por Pinochet. La Constitución hecha en la dictadura tenía que ser, para Guzmán, la única cancha posible de la política en el futuro y la UDI nació con la vocación de ser el equipo que siempre jugase en casa, el guardián de las esencias.

A pesar de que los gobiernos de la Concertación procuraron —y en varios casos, lograron—, jubilar o arrinconar varias de estas ideas y avanzar en mejoras sociales, el límite de lo posible forjado por Guzmán mostró una notable fortaleza (Tohá, 2020). Michelle Bachelet dio, en su segundo gobierno (2014-2018), y no sin



resistencia ni costes, los primeros tibios pasos para cambiar la Constitución. Pero su gobierno se vio enredado en frustrantes traspies políticos, sumados a la resistencia conservadora, y ello contribuyó a debilitar a las fuerzas de centroizquierda y abrió camino a nuevos partidos, entre ellos los surgidos de las movilizaciones estudiantiles de 2011, que de algún modo eran una continuidad de la “revolución pingüina” de 2006 y tenían, en su núcleo de demandas, la desmercantilización de la educación y de otras áreas de la vida social.

En ese marco, el Frente Amplio (FA) nació en enero de 2017 como una alianza de nuevos partidos, con una fuerte crítica al sistema político existente, a sus límites, sus prácticas y protagonistas. También defendía, con mayor convicción, la necesidad de una nueva Constitución. En su primera cita electoral, ese mismo año, alcanzó el 20,27%, un gran resultado para la primera elección general de una nueva fuerza política; se quedó muy cerca del candidato oficialista, Alejandro Guillier, quien pasó al balotaje contra Sebastián Piñera. Sin embargo, el FA tuvo que escoger a quién apoyar en el mismo y, por tanto, distinguir entre los dos representantes de los dos bloques tradicionales de las últimas tres décadas. Algunos de sus miembros reclamaron la abstención; no obstante, sus principales referentes (Beatriz Sánchez, Gabriel Boric y Giorgio Jackson) llamaron públicamente a votar por Guillier para frenar el retorno de Piñera al poder. Decisión criticada y que, junto el ingreso del FA al Congreso Nacional, planteaba de manera cruda el reto de cómo gestionar con éxito ser minoría en las instituciones y, a la vez, ser una

fuerza política con un discurso de cambio total.

Sebastián Piñera retornó a La Moneda, por segunda vez no consecutiva, el 17 de diciembre de 2017, con un 55% y una participación electoral menor al 50%. La clara ventaja confirmó a Piñera en su diagnóstico y su coalición subestimó el malestar creciente en la sociedad chilena, atravesada no solo por las demandas contra el lucro en la educación, sino contra el sistema privado de pensiones (las administradoras de fondos de pensiones, AFP) y contra la pervivencia de las jerarquías patriarcales fuertemente asentadas. Piñera no solo no quiso escuchar las demandas de una nueva Constitución, que achacaba a sectores minoritarios y radicalizados, sino que desarrolló un programa ubicado más a la derecha que el de su primer gobierno (2010-2014). La calle fue, entonces, subiendo de temperatura, pero el gobierno tuvo pocas dudas de responder con un uso excesivo de la fuerza pública —criticado por organismos internacionales de derechos humanos—, y tomó incluso la decisión de que Chile abandonase distintos tratados internacionales en los que, de hecho, el país había tenido un rol destacado¹. Al mismo tiempo, se volvió promotor de la línea más dura de la región con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, e incluso protagonizó el fracasado episodio en Cúcuta, cuando la oposición venezolana intentó ingresar ayuda humanitaria arropada por algunos referentes de centroderecha y derecha regionales.

¹ Como su retirada del Pacto Mundial para la Migración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o su negativa a firmar el Acuerdo de Escazú, instrumento fundamental en materia climática y que, paradójicamente, había sido promovido por Chile.



Piñera consideró que, con su retorno al poder, volvía la normalidad al país, al camino de la excepción en la región frente a los populismos circundantes.

Un oasis es una buena palabra para decir excepción. El 9 de octubre de 2019, Sebastián Piñera declaraba lo siguiente:

Argentina y Paraguay, en recesión; México y Brasil, estancados; Bolivia y Perú, con una crisis política muy grande; Colombia, con un resurgimiento de las Farc y las guerrillas. En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año, los salarios están mejorando (Cooperativa.cl, 2019a).

Apenas nueve días después, el 18 de octubre, las protestas que habían empezado a inicios de mes contra el alza de la tarifa del transporte en Santiago, adquirieron una envergadura inédita, y se inició un fuerte ciclo de protestas, conocidas como el “estallido” o reventón social, que pusieron contra las cuerdas, no solo a Piñera —que verá hundida su popularidad hasta el final de su mandato—, sino que recuperaron con fuerza el cuestionamiento a todo el sistema. La sorpresa fue tal en los círculos de poder que la esposa de Piñera, Cecilia Morel, comparó a los manifestantes con una “invasión alienígena” (BBC, 2019).

El impulso de la calle fue central para volver a poner en el centro la demanda de una nueva Constitución. En un primer momento, Piñera se resistió, pero luego él, y buena parte de la clase política, propusieron un acuerdo para activar el proceso constituyente; varias de las organiza-

ciones y las protestas leyeron esto como una trampa: una dilación a la espera del reflujó, el cansancio, para que poco a poco emergiese de nuevo la excepción chilena. El Partido Comunista (PC) decidió no respaldar el acuerdo. El FA, nuevamente, volvió a estar en un lugar incómodo: tratar de mejorar el acuerdo y no desaprovechar la oportunidad de dejar atrás la Constitución de Pinochet, pero evitando que se diluyan las potencialidades políticas y sociales de la Convención Constitucional.

La imagen del “oasis” en realidad no dejaba ver que Chile contaba con la sociedad más movilizadora de la región en estos últimos años: desde la cresta de la ola, el acuerdo propuesto por el poder se veía solo como una trampa, como un intento de desactivar la “potencia constituyente”. Por supuesto que existía esta intención desde el gobierno, pero no era cierto que el acuerdo fuera solo un mecanismo para desactivar la protesta. En un gesto políticamente audaz, y arriesgado, el entonces diputado Gabriel Boric, a título personal, le puso la firma al acuerdo el 15 de noviembre de 2019. Contaba con el apoyo de parte del FA y de algunos de sus referentes, pero también con la fuerte oposición de otros tantos. Buscó así funcionar como una cuña en el sistema institucional utilizando la fuerza de las calles. La firma de Boric, aun “a título personal”, en realidad no lo era del todo porque su firma significaba comprometer a algunos más que a él. Así lo entendió su partido, Convergencia Social (CS), parte de la coalición FA, que decidió observar su militancia y abrirle un proceso disciplinario que contemplaba su expulsión (Cooperativa.cl, 2019b).



La ruta para la concreción de los pasos del acuerdo no sería fácil, como bien advirtieron algunos referentes de la protesta: el gobierno y la derecha procuraron poner todos los palos en la rueda. Sin embargo, el país no lograba volver a la normalidad tan ansiada desde la administración Piñera. Además, un gobierno tan dañado en su credibilidad es el que debió hacer frente a la pandemia, el “cisne negro” que cayó en un Chile, a diferencia de sus vecinos, muy poco acostumbrado a la incertidumbre. El plebiscito por una nueva Constitución llegó finalmente a buen puerto en abril de 2020 y, además, lo hizo con una participación que se ubicó, simbólicamente, por encima del 50%, lo que demuestra que este anhelo tenía el apoyo de una mayoría de los chilenos. En ese marco, el “Apruebo” se impuso con un aplastante 80% de los votos.

Boric transitará entonces una ruta llena de obstáculos, hoy olvidada por su contundente victoria en las presidenciales. Además de casi acabar muerto políticamente por el episodio de la firma del acuerdo político, en las primeras encuestas donde aparecía su nombre se ubicaba a la cola y con resultados más bien modestos: el alcalde comunista Daniel Jadue o la excéntrica diputada Pamela Jiles, apodada la “Abuela”, que rompió con el FA muy pronto de iniciada la legislatura, concentraban un mayor número de apoyos. En el FA hubo un intenso debate sobre quién debía asumir la precandidatura presidencial: si repetía Beatriz Sánchez, o si buscar otra figura independiente como ella. Giorgio Jackson estaba por debajo de los 35 años exigidos por la ley. Pero cuando Beatriz Sánchez decidió ir a las elecciones para ser convencional constituyente,

los focos se dirigieron poco a poco más hacia Boric, que superaba por meses la edad legal.

El FA y el PC decidieron entonces realizar una primaria conjunta. Bajo el sistema chileno de primarias optativas financiadas por el Estado, estas son una vidriera política que los partidos suelen aprovechar. Finalmente se excluyó al Partido Socialista (PS), más en línea con el deseo del PC que con el FA. Boric tuvo dificultades para lograr el número mínimo de firmas requerido para su habilitación. Otra vez sobrevoló la idea de que el daño por la firma del acuerdo político era un lastre todavía vigente. De hecho, en un episodio que muchos interpretan como decisivo por la movilización que provocó, Pamela Jiles declaró con sorna que a Boric no lo quería nadie por haber traicionado a la protesta y apuntó que debía retirarse: “(...) enfrenten que no lograron juntar las firmas necesarias porque el pueblo no los quiere. Los nietitos [como “Abuela Jiles”, se refiere a los jóvenes chilenos] los destestan, váyanse para la casa”.

Jiles es un personaje que cuenta con una legión, aun decreciente, de fieles, pero resulta antipática para diversos sectores, muy amplios por sus excesos retóricos y estéticos. Este ataque más bien provocó el impulso, la épica, que necesitaba la campaña de recogida de firmas de Boric, que en los pocos días restantes sumó voluntarios y firmas, y superó el umbral de 33.000 (al momento del sarcasmo de Jiles llevaba 13.000 firmas y estaba a pocos días de que se cumpliera el plazo). Con esto, logró habilitarse para competir en la siguiente fase contra Daniel Jadue. Para las encuestas y la casi totalidad de análisis



tas, parecía una campaña perdida desde el inicio: los ciudadanos dispuestos a participar en una primaria de la coalición de izquierda entre el FA y el PC, denominada Apruebo Dignidad para captar el clima constituyente, serían, en su mayoría, críticos con un Boric presentado como “amarillo” por su supuesta tibieza, mientras que Jadue sería alguien inequívocamente de izquierda, que quiere cambios de verdad, que llama a las cosas por su nombre. Contra todo pronóstico, Boric se impuso a Jadue por 60% frente a 40%. Desde sectores del PC se apuntó a una suerte de conspiración en la derecha que habría movilizado votantes en secreto para que participasen en la primaria, derrotar así al candidato que realmente temían, Jadue, y dejar habilitado para la carrera a alguien que no asustaba y que no ganaría, Boric. Estas críticas bajaron de intensidad, la alianza cerró filas y se impuso la contundencia de los números de Boric: la primaria del Apruebo Dignidad había sido un éxito movilizando a más de 1.700.000 chilenos, opacando totalmente los números de la primaria de la derecha de gobierno.

Cuando el expresidente Ricardo Lagos expresó su apoyo a Gabriel Boric en segunda vuelta, puso de manifiesto que lo que ocurrió el 15 de noviembre rescató esa faceta del ahora presidente que le permitiría ampliar las bases de su alianza original: “Boric se atrevió solo a firmar el acuerdo de noviembre... Eso habla de alguien que es capaz de decir ‘este es el camino’, aunque los suyos no lo sigan, y no lo siguieron en ese momento”.

La primera vuelta había dejado a un José Antonio Kast en primer lugar, con 28%,

dos puntos por delante de Boric, que acabó con 26%. Esta también fue la primera elección en la que ninguno de los dos grandes bloques que protagonizaron el poder después de Pinochet lograba poner un candidato en el balotaje. El segundo lugar amargo del resultado de Boric dejó también varias preguntas y preocupaciones en la campaña del Apruebo Dignidad. Arrojó dudas sobre si la apuesta se había quedado corta por moderada, como algunos sectores más a la izquierda de su coalición empezaron a señalar, o por lo contrario. Un dato alarmante fue que la cantidad de votos de Boric era casi idéntica a la participación en las primarias de Apruebo Dignidad, es decir, no había podido salir del nicho de su espacio. ¿Las demandas de orden se habían impuesto sobre las de cambio?, ¿era la hora de la bajada de la marea y del reflujo social?, ¿las mayorías silenciosas vencían a las minorías del cambio? Las preguntas emergieron entre políticos y analistas. Que un candidato que reivindica a Pinochet quedara primero parecía romper todos los marcos interpretativos sobre el reventón chileno de estos años.

Boric y su núcleo duro se movieron rápido y, en lugar de caer en la tentación del repliegue —de creer que tenían que moverse más “a la izquierda”— decidieron redoblar la apuesta e ir hacia adelante. Apostaron por sintonizar más con los chilenos que no les habían votado, que pensar solo en los que sí lo habían hecho. Apostaron, más que por la izquierda tradicional, por sensibilidades contemporáneas. El símbolo de la campaña de la primera vuelta fue un árbol que representaba aquel al que el candidato subía en su infancia en Magallanes, el extremo sur chi-



leno; de hecho, su primer spot fue precisamente ese, él volviendo a subir a ese árbol. Dos días después de la primera vuelta, el 23 de noviembre, Boric visitó el municipio popular de La Pintana, que tiene como alcaldesa a Claudia Pizarro de la Democracia Cristiana (DC) y, haciendo referencia al árbol, dijo:

Nos bajamos del árbol y estamos en el territorio, estamos con los vecinos y las vecinas, con los chilenos y las chilenas que quieren vivir en paz, que quieren justicia para vivir en paz. Pueden confiar en nosotros, tenemos un compromiso ineludible para enfrentar al narcotráfico, a la delincuencia y recuperar los espacios públicos con seguridad (Moreno Berroeta, 2021).

Esta visita y la declaración muestran bien las tres grandes decisiones que se tomaron de cara a la segunda vuelta. Bajar al territorio, fichar independientes y establecer contactos y alianzas con los partidos y referentes de centroizquierda. La visita temprana a La Pintana, municipio con serios problemas de delincuencia y con una alcaldesa de un partido que no es parte del Apruebo Dignidad, pero que se sumó a la campaña desde ese momento, fue toda una declaración de intenciones. La reconciliación, el abrazo con Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso desde 2016, también tuvo un impacto. Sharp fue de los críticos más duros con Boric por el episodio de la firma de noviembre de 2019; de hecho, un día después renunció al partido que ambos fundaron, CS, se alejó definitivamente del FA, y pasaba al Apruebo Dignidad por su izquierda. El cambio político había llegado a distintas e importantes ciudades y comunas chilenas en las municipales de mayo de 2021: Valdivia, Viña del Mar, Santiago, Maipú, etc. Estos y otros alcaldes y alcaldesas, apenas en

sus 30 años, se volcaron en la campaña, así como lo hicieron la casi totalidad de los recién electos, por primera vez gobernadores regionales, no todos de la coalición.

La campaña de Boric incorporó entonces a muchos independientes para ampliar y cubrir aspectos que necesitaban ser reforzados. Presentaron un consejo económico asesor con nombres prestigiosos, claramente alejados de sectores muy a la izquierda, como Andrea Repetto o Eduardo Engel; en seguridad incorporaron a expertos como Eduardo Vergara, que tuvo responsabilidades de gobierno durante la Concertación y que, en primera vuelta, había trabajado con la candidata de la DC, Yasna Provoste. Por supuesto, merece especial atención la incorporación de la hasta entonces presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches, como jefa de campaña. Junto a Giorgio Jackson como coordinador político, la carismática y joven médica fue la persona más cercana a Boric en la campaña para la segunda vuelta. Siches, de 35 años, oriunda del norte andino del país, fue la figura más valorada por los chilenos durante buena parte de la crisis de la pandemia en su condición de cabeza del Colegio Médico. Había sido reelecta hacía poco, pero inmediatamente después de la primera vuelta renunció en un sentido discurso para incorporarse a la campaña. Recorrió todo el país, arrancando precisamente en el norte. Junto a varios referentes del espacio, otros independientes e incluso miembros de otros partidos, llevó adelante la iniciativa “Un millón de puerta a puertas por Boric”, que finalmente llegó a registrar más de 1.200.000 puertas tocadas. Siches fue presentada en enero de 2022



como futura ministra de Interior, cargo que en los códigos locales es un virtual número dos.

Por último, pero tan importante como las anteriores acciones, está el establecimiento de alianzas para ampliar la coalición original. Boric se acercó a los partidos y referentes que conformaban la Concertación, desde la DC hasta el PS, con el que el FA ya se venía coordinando en la Convención Constitucional, incluso más que con el PC. En encuentros cargados de simbolismo, se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet y con la líder demócrata-cristiana, Carmen Frei. La DC sufrió presiones por la derecha y algunos dudaron que esta fuerza, el ala derecha de la ex Concertación, apoyara una alianza que incluía al PC como socio de peso. Pero al final se produjo el apoyo sin contrapartidas, ayudado por el perfil de derecha radical de Kast. Boric repitió muchas veces durante esas semanas que sus decisiones de ampliar el espacio no eran una mera estrategia electoral, sino que estaba convencido de ellas. Esto se constata no solo atendiendo a sus declaraciones, sino también a los cambios en su programa de gobierno, y en el perfil de los técnicos o expertos que se acercaron a trabajar en el mismo. Y, más aún, se comprueba cuando se analiza la composición del gabinete de ministros que ha presentado, y se ve la trayectoria y militancia de los mismos.

Con el nombramiento en el Ministerio de Hacienda de Mario Maciel —presidente del Banco Central y un hombre del espacio del PS que desempeñó distintas responsabilidades con la Concertación—, la señal es que las posiciones más rupturistas no tendrán cabida en la política eco-

nómica del futuro gobierno. Tanto el presidente electo como sus voceros más cercanos han apostado por el gradualismo en los cambios que vayan implementando. Gradualismo, han precisado, que no puede entenderse como moderación, sino como búsqueda de acuerdos y de armar equilibrios nuevos. No hay que olvidar que la Convención Constitucional se encuentra en plena deliberación y que es allí donde se debatirá el alcance de los cambios más ambiciosos, de mayor envergadura. El gobierno puede tener cierta ventaja en esto: no debería ser el depositario de algunas de las demandas de transformación más profundas, ya que estas se discuten en otro lado y, además, la nueva Constitución pasará por el veredicto popular. El dilema aquí, como apunta Juan Pablo Luna, es que el gobierno debería apoyar con decisión al éxito de la Convención, pero con la cautela de que este apoyo no se interprete como injerencia y que el texto final no sea percibido como muy de parte, muy de Apruebo Dignidad, lo que puede suponer un riesgo de cara a su validación popular (Guzmán, 2021).

En derechos humanos sí se puede esperar una agenda más a la izquierda. Siches tiene varias tareas urgentes y aquí es probable que haya una fuerte presión contra tiempos muy dilatados para encontrar acuerdos, y dedicación al debate y la discusión, porque los indultos a los presos del estallido o la reforma de las fuerzas de orden público son una tarea prioritaria y una promesa muy repetida, además del principal motivo de apoyo de algunas organizaciones y figuras. La elección de Antonia Urrejola, abogada experta en derechos humanos y expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH), muestra que esta materia será también decisiva en su política exterior. En este campo, las diferencias y las críticas de Boric hacia el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, pero también hacia el de Maduro, son tan claras como duras. La propia Urrejola, en su pasado en la CIDH, había sido muy crítica con ambos gobiernos, así como con la violación de derechos humanos durante los días posteriores al golpe contra Evo Morales, y con las fuerzas del orden público bajo el gobierno de Iván Duque en Colombia.

En la primera entrevista a un medio internacional, posterior a la presentación de su gabinete, Gabriel Boric ya dio algunas pistas sobre la idea de la relación que su país debe mantener con sus vecinos (BBC, 2022). Por supuesto, se inclina al lado de la integración regional y no en el de la excepción, pero esto tiene distintas maneras e intensidades de decantarse. En la entrevista nombró a Luis Arce, Gustavo Petro o Lula como líderes con los que espera tener más que una buena relación. También se refirió a Nicaragua y Venezuela, apuntando que:

En el caso de Nicaragua no logro encontrarle nada ahí, y en el caso de Venezuela es más bien una experiencia que ha fracasado y la principal demostración de su fracaso son los seis millones de venezolanos en diáspora (BBC, 2022).

Esta afirmación provocó airadas respuestas de parte de la izquierda bolivariana; el expresidente Rafael Correa o el politólogo argentino Atilio Borón salieron al cruce. También le respondió sin mencionarlo, pero sin dejar dudas de que se refería a él, el excanciller venezolano Jorge Arreaiza, que escribió en Twitter: “Hay izquierdas tan extraviadas que no se dan cuenta

que, sin la resistencia y el coraje de los pueblos más asediados por EE.UU., ellas serían poco menos que nada”. Uno de los comentarios a este tuit fue el de Daniel Jadue que escribió: “Toda la razón, compañero. Fuerza y coraje para lo que se avecina”.

No solo en política internacional, también en política doméstica ciertos sectores del PC o referentes a la izquierda de la coalición, ya están criticando las primeras acciones del presidente electo. De hecho, el nuevo gabinete, o más bien la importante presencia en el mismo de figuras de la órbita de la Concertación, ha sido recibido con frialdad e incluso con críticas por parte de sectores del PC. Este, por otro lado, está representado en el ejecutivo con tres carteras, una de ellas tan importante como la vocería, en manos de Camila Vallejo, referente de la generación *millennial* del partido, que viene aumentando su peso y cambiando la “estética” de los viejos comunistas chilenos.

Por su parte, Jorge Sharp, ha vuelto a marcar nuevamente alguna distancia con su excompañero. Si bien reconoce que el gobierno de Boric abre un nuevo ciclo, también apunta ciertas críticas al gabinete:

Llama poderosamente la atención de que pareciera ser que la alianza del gobierno ya no es Apruebo Dignidad, sino que la alianza del gobierno es una alianza distinta a dichos partidos con la inclusión, básicamente, de importantes y muy insignes militantes del mundo socialista y del mundo de la ex Concertación al gabinete del Presidente Boric [...]. Tiendo a pensar que no es solo fruto de un hecho puntual, sino que más bien parte de la construcción de un nuevo espacio político en Chile dado por los partidos que hoy día componen el gabinete (Cornejo, 2022).



Los reclamos por un exceso de representación de los aliados en el gabinete de ministros también vinieron de los partidos que forman el FA, incluso del mismo partido de Boric, así como de Revolución Democrática (RD), el partido de Jackson. Esta demanda fue central a la hora de nombrar los 39 subsecretarios, donde la representación del Apruebo Dignidad es muy amplia, dejando un espacio menor para independientes o miembros de partidos aliados. Este equilibrio, entre los miembros de su propia coalición y los de sus aliados, será un tema constante y complejo de gestionar para Boric. De hecho, desde la DC, que no se vio incluida ni en el gabinete ni entre las subsecretarías, el malestar va en aumento y, aunque no es ya la organización política que fue hace una década, cuenta con parlamentarios fundamentales para formar mayoría.

El 11 de marzo Gabriel Boric asumió como presidente. En medio de una alta expectación, con varios jefes de Estado presentes, pronunció un intenso discurso que supo conjugar bien la referencia a figuras históricas de la izquierda, lejos de la nostalgia, con una mirada de futuro. En su discurso se incluyeron también referencias a lo que son los aspectos más propiamente contemporáneos de su propuesta: mujeres, ecología y pueblos indígenas. Los primeros días de su administración no han sido tranquilos. En la primera visita de la ministra Siches a la región de la Araucanía, fue recibida con disparos al aire y protestas que la llevaron a interrumpir su visita a una familia de un joven indígena asesinado en 2018 por la policía. El sur y el norte del país son focos de tensión desde hace un tiempo. El

16 de marzo, el gobierno decidió prorrogar el estado de excepción en zonas del extremo norte del país, una decisión que viene heredada desde febrero —fue tomada por Piñera—, y que ya ha generado los primeros roces con algunos parlamentarios de izquierda que no son miembros formales de la coalición de Boric. El compromiso del gobierno es mantener este estado por última vez, y con plazo hasta el 15 de abril, fecha en la que esperan haber logrado acuerdos en la zona que rebajen la tensión.

El gobierno apuesta por una fuerte política de comunicación, la presencia de sus ministros en medios es continua, así como su uso intensivo de distintas redes sociales, comunicando incluso el balance de actividades del día, por supuesto semanales. La coalición está en una fase de ajuste y de calibrar mejor su funcionamiento, tanto en el ejecutivo como en el Congreso. También se está dando prisa en cumplir con algunos de sus compromisos de campaña, como el retorno de Chile al Acuerdo de Escazú (ya adoptado) o iniciar el proceso de retirar ciertas denuncias contra activistas y manifestantes del estallido, así como dar prioridad al indulto. A nivel regional, Boric tiene previsto su primer viaje a Argentina. Y sus primeras reuniones y gestos durante su acto de posesión ya corroboran las líneas adelantadas en campaña; estuvieron desde el escritor y exvicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez, perseguido por Ortega, hasta el boliviano Luis Arce, o el ecuatoriano Guillermo Lasso, miembro activo de la Alianza del Pacífico, como Chile.



Perú

El político francés Georges Clemenceau fue uno de uno de los invitados al primer centenario de Argentina. Una de sus observaciones más ácidas sobre el país, con un dejo colonial evidente, sigue circulando con cierta regularidad entre las plumas más reactivas a la tradición nacional-popular. La frase de marras dice: “La Argentina crece gracias a que sus políticos y gobernantes dejan de robar cuando duermen”. Esta expresión ha tenido distintas declinaciones en otros países de la región a lo largo del último siglo. En los últimos años, la versión peruana reza de la siguiente manera: “Perú crece de noche, cuando los políticos duermen”. Frase corta pero muy expresiva: los políticos son, en el mejor de los casos, un estorbo, y en cualquier caso no participan ni colaboran con el crecimiento económico del país que, de manera natural y por fortuna, sigue creciendo de noche. El desplazamiento de lo económico a un espacio ajeno —la noche, en este caso— a la luz del escrutinio popular es parte fundamental del proyecto neoliberal. Las élites peruanas de las últimas décadas han mantenido prácticamente inalterable el modelo económico vigente y son sus celosas guardianas, sobre todo cuando algún proyecto político pretende promover modificaciones —siendo que muchas veces se ha tratado de mínimas propuestas de cambio—. La reacción es más dura cuando alguien propone cambios algo más profundos, como una reforma de la Constitución o un cambio del tipo de gravámenes que pagan las empresas mineras, o plantea que quiere discutir la propiedad del gas.

Desde el año 2000, Perú ha visto circular presidentes nominalmente muy distintos entre sí; sin embargo, sus prácticas han tenido escasas diferencias. Aun así, la disputa entre ellos ha sido feroz y las acusaciones, los juicios y ataques virulentos han sido la tónica. Poca diferencia en las políticas implementadas, mucha afectación en la disputa. Efectivamente, hablando de datos macroeconómicos, el país presentó un promedio de crecimiento que lo puso en la cúspide en la región estos últimos tiempos. No obstante, detrás de estos números se han ido acumulando una serie de problemas sin resolver, muchos de los cuales han roto sus costuras, en mayor medida durante la pandemia. Perú encabezó durante muchos meses la lista de países con más proporción de fallecidos a escala mundial (Rtve Noticias, 2021). La explicación del fuerte peso de la economía informal, los hacinamientos en las altamente pobladas áreas periurbanas y un deficiente sistema de salud fueron una bomba que fracturó el sueño del eterno crecimiento —que no de redistribución— por control remoto.

Durante los primeros años del siglo XXI, el “gran otro” fue el fujimorismo, y la élite lograba cohesionar mayorías suficientes agitando esta bandera: no se podía volver atrás, a los años de Fujimori y Montesinos. Hubo presidentes, como Alejandro Toledo, que aparentaron buscar cierta apertura, más en términos de “reconocimiento” que en el área económica, por ello reivindicó su condición de “cholo”. Pero quienes se podían identificar con su raíz quechua vieron que lo prometido por Toledo no se concretó en avances claros. El techo de cristal siguió operando. Tan poco se ha avanzado en esta ma-



teria que, todavía hoy, no se puede hablar en quechua en el Congreso de la nación. La reivindicación de Toledo tuvo una utilidad más de cara al exterior, como un condimento de la exitosa exportación de la marca Perú: estrategia de posicionamiento que pivotaba sobre las ruinas incas y su gastronomía. Plural hacia afuera, prácticamente inalterable hacia dentro. La historiadora Cecilia Méndez ha estudiado profusamente la relación que ha tenido históricamente la élite criolla con lo inca y con lo indio, y de qué manera esta ha practicado una suerte de patriotismo arqueológico que se podría resumir en “incas sí, indios no” (Patriaú, 2021). La imagen congelada y pretérita, incluso dorada, es aceptable e incluso positiva; sin embargo, la del indio “realmente existente” es una amenaza continua de desacomodo.

Llegó así la candidatura presidencial de Ollanta Humala en 2006. Un Humala que no solo criticaba con dureza la “impostura” de Toledo, sino que prometía ser el referente local del cambio político que los peruanos veían que estaba teniendo lugar en la mayoría de los países vecinos. Le cerraron el paso en la segunda vuelta Alan García y la Alianza Popular Revolucionaria Americana (el APRA); hasta hacía no mucho estos dos nombres asustaban a la élite; entonces, en 2006, ya no lo hacían porque probablemente no tenían ninguna intención de cambiar demasiado las cosas de sitio. Si bien García mantenía algunas de las habilidades que lo convirtieron en uno de los políticos más relevantes de la historia peruana del siglo XX y principios del XXI, su administración no estuvo exenta de serios problemas y acusaciones de corrupción que, cuando el APRA salió del gobierno, resultaron ser

peores de lo que parecía cuando se denunciaron. Durante esos años, tuvo lugar también la masacre de Bagua. Humala tuvo una nueva oportunidad en 2011, y el hecho de que su contendiente fuera Keiko Fujimori le dio la oportunidad de establecer una serie de acuerdos con la élite, cuyos representantes más connotados, como Mario Vargas Llosa, le apoyaron públicamente. Claro que este apoyo supuso, como se vio después, que las ideas de cambio que defendía se quedaron guardadas en alguna libreta: la gestión fue de continuidad. Perú, es cierto, seguía creciendo de noche, pero durante el día las condiciones para muchos de sus ciudadanos se ponían más difíciles. Lo de Humala, más que un acuerdo, fue un tratado de paz que, en línea de lo que dejó dicho Walter Benjamin, es la imposición de las ideas del vencedor. Esto provocó que, antes de acabar su primer año de gobierno, la casi totalidad de referentes de izquierda que le habían prestado su apoyo, o que incluso desempeñaron cargos en su gobierno, renegasen de él.

Sin embargo, el malestar popular crecía junto a los escándalos de corrupción y la distancia entre representantes y representados, en medio de una profunda crisis del sistema de partidos. El fujimorismo tenía una fuerte presencia en el Congreso y esto, más la fragmentación política de los otros espacios políticos, convirtió al Congreso en un factor de desestabilización permanente. Una particularidad del Perú reciente es que todos los que han sido presidentes desde 2001 están encausados, sentenciados o fueron llevados a la cárcel por corrupción durante sus gestiones. El caso Odebrecht se ha vuelto el apellido de gran parte de la clase política nacional,



empeorando su ya aguda crisis. También se puede observar que, contra casi toda lógica, los partidos políticos que auparon a estos presidentes al gobierno, no solo no son capaces de repetir victoria, sino que han sido prácticamente borrados del mapa político. La reelección del partido parece estar prohibida en Perú, pero no por una norma, sino porque estos implosionan poco después de acceder al gobierno. La clase política, por lo tanto, fue estrechándose: cada vez representaban a menos peruanos, y daban cabida a menos demandas y expectativas; sus políticas, como sus siglas, fueron desdibujando sus aparentes diferencias. El país oficial se alejaba del país real y la percepción de crisis iba en aumento. Como dice el politólogo Alberto Vergara, “la historia del Perú es un cementerio de proyectos políticos”.

El desencanto con Humala había provocado una ola de decepción en la izquierda peruana; sin embargo y contra pronóstico, al final de su mandato esta consiguió unirse en torno al liderazgo de Verónica Mendoza en la coalición Frente Amplio —la propia Mendoza, exdiputada del partido de Humala, con quien rompió muy pronto, y Marco Arana, conocido dirigente de izquierda, fueron los dos líderes más importantes del nuevo espacio—. Verónica Mendoza compitió en las elecciones de 2016 contra Keiko Fujimori, favorita en las encuestas, y el empresario y exministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski (conocido como PPK, las mismas siglas que su partido personal: Peruanos por el Cambio). Mendoza elaboró un discurso impugnatorio del sistema, de sus protagonistas y sus prácticas; de manera similar al FA chileno en su

primera contienda electoral. Fujimori logró el 39,8% y pasó a una difícil segunda vuelta, pero arrasó en escaños y obtuvo mayoría absoluta en el Congreso. El FA hizo una buena campaña, más aún tomando en cuenta su condición de nueva fuerza y que arrastraban el clima de desencanto que dejó Humala en ciertos sectores más proclives a votar por un cambio: obtuvo el 18,8%, pero quedó en tercer lugar. PPK llegó al 21% y con ello pasó a la segunda vuelta contra Fujimori.

Durante toda la campaña, Fujimori mantuvo claramente más opciones de imponerse a un PPK con poca fuerza y que, además, por ser un digno representante del sistema político de las últimas décadas, despertaba muy poco entusiasmo. El FA se encontró en una situación incómoda, y le tocó distinguir después de una campaña y un discurso de primera vuelta que presentó como igual de poco deseables a Fujimori y a PPK. No fue una decisión sencilla ni poco debatida y, apenas seis días antes de la segunda vuelta del 5 de junio de 2016, Mendoza llamó en un video a votar por PPK: “...a ti que apostaste por el cambio, por el Frente Amplio, que nos diste tu confianza, quiero, en confianza, compartirte lo que pienso...” (RPP Noticias, 2016). Mendoza había obtenido un gran resultado electoral, en especial en la zona andina del país y en ciudades como Arequipa, y el FA se posicionó como la segunda fuerza parlamentaria después del fujimorismo. Sin embargo, no lograría mantenerse mucho tiempo unido y, durante los primeros meses de 2017, el grupo parlamentario se dividió en dos mitades exactas y, nuevamente, los votantes por el cambio encajaron un nuevo revés.



PKK ganó la segunda vuelta por apenas 41.000 votos y no resultó ser más que un parche dañado y frágil que, en lugar de bloquear la sangría por donde el sistema perdía legitimidad, la aceleró. Duró apenas dos años muy convulsos. El escándalo Odebrecht se lo llevó por delante, pese a haber buscado cualquier tipo de paz con Fujimori, que con sus más de 70 escaños prácticamente (des)governaba desde el Congreso.

Asumió entonces el vicepresidente Martín Vizcarra, quien identificó rápidamente no solo que el Congreso era su enemigo, sino que este órgano tenía una valoración por los suelos. La guerra entre poderes estaba servida. Vizcarra gozó de buenos porcentajes de popularidad durante su mandato y entendió que, si no se hacían algunos cambios, el riesgo de un quiebre del sistema era real. Pero algunos de los que aseguran que Perú sigue creciendo en la dirección que debe fuera de la luz del escrutinio popular, no eran partidarios ni siquiera de cambios lampedusianos.

Lo exigente de este celo lo ilustra bien la polémica que suscitó la ministra de Economía de Vizcarra, María Antonieta Alva, quien estudió en Harvard y está muy lejos de la izquierda bolivariana, cuando declaró, a finales de 2019, que la desigualdad era la principal tara del país:

Creo que en este país las personas todavía no valemos lo mismo. Y mientras que funcione así este país, creo que no vamos a salir adelante [...]. Pensemos en la cobertura que hacen los medios a cosas que suceden en San Isidro versus las cosas que suceden en otros lugares. Pensemos en el trato de algunas agencias públicas, en algunos hospitales. Creo que el gran problema del Perú es que todavía la gente no vale lo mismo (Perú 21, 2019).

No se trata de una declaración radical, es más bien una constatación sencilla de realizar, sin embargo, no lo pensó así María Isabel León, en ese entonces presidenta de la poderosa Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que expresó su preocupación por esas declaraciones. La lucha entre Vizcarra y el Congreso tuvo varias batallas y fases, e incluso en un momento especialmente delicado intervinieron las fuerzas armadas, cuando parecía que había dos presidentes: Vizcarra y Mercedes Araoz, proclamada por parte del Congreso (La Vanguardia, 2019). Finalmente, Vizcarra cayó apenas faltando cinco meses para las elecciones generales ya convocadas y, como todos sus antecesores, tiene no pocos procesos judiciales y sanciones congresales, una de los cuales incluso ha evitado que acceda al curul que ganó en la última elección, en la que fue el candidato a diputado más votado.

Francisco Sagasti fue el diputado a quien el Congreso, muy presionado desde las calles, eligió presidente para gestionar unos pocos meses el país, hasta que las elecciones de abril de 2021 definiesen a su sucesor. Para esas elecciones el sistema de representación peruano estaba sumido en una profunda crisis, y de esta tampoco se salvó el otrora resistente fujimorismo: Keiko era vista por una gran mayoría como la responsable de haber usado su mayoría congresal para tumbar presidentes y promover normas que favorecieran sus intereses. Empezó la campaña presidencial con un dígito en intención de voto. Sin embargo, el resto de los candidatos no estaba mucho mejor: durante la totalidad de la campaña entre cinco y seis candidatos peleaban por décimas y se



movían alrededor del 10%. Una fragmentación que no invitaba a pensar que la aguda crisis se fuera a resolver rápidamente por el camino electoral, ya que todos los estudios demoscópicos aseguraban, como ocurrió, que el Congreso saliente estaría todavía más fragmentado que el anterior. Siempre con pronósticos que se movían en el margen de error, muy cerca de la elección se detectó un crecimiento de Fujimori —nutrido por las limitaciones de los otros dos candidatos punteros en la derecha, el ultra Rafael López Aliaga, y el economista Hernando de Soto—, y de un desconocido dirigente del magisterio cajamarquino, Pedro Castillo, que era la carta electoral independiente de un partido pequeño, Perú Libre (PL), que crecía en parte por la dificultad de Verónica Mendoza de recuperar el empuje en el voto más identificado con la izquierda, y por representar una mezcla *outsider* y antisistema.

Castillo le ganó a Fujimori la primera vuelta de las elecciones del 11 de abril. Un dato relevante fueron los bajos porcentajes de ambos contrincantes para el balotaje en esta primera vuelta: poco menos de 19% Castillo, y algo más de 13% Fujimori. Cuando la CNN informó de esta noticia, durante unos minutos puso el cuadro de Pedro Castillo sin imagen. La victoria de Castillo fue inesperada, se nutrió sobre todo del voto del sur, de los sectores más empobrecidos y con mayor identificación étnica, y creció al final de la campaña, cuando ya no podían difundirse encuestas. En Lima, sin embargo, no consiguió un apoyo relevante y casi de inmediato empezó una fuerte campaña en su contra, recuperando la idea de la amenaza comunista. Para la élite —salvo con-

tadas excepciones— el fujimorismo pasó, casi de inmediato, de ser el “gran otro” a ser el mal menor, a luego ser, apenas unas semanas después, algo casi deseable. Valía todo antes de una alternativa que podía representar, más allá de los eslóganes de campaña, un cambio. Una parte importante de los referentes liberales locales, incluso de centroizquierda, no se pronunció en favor de Castillo, y varios otros lo hicieron abiertamente a favor de Keiko. Además, un número relevante de figuras de la derecha latinoamericana se volcó en la campaña para habilitar a Keiko. Procuraron con su presencia certificar que Fujimori había dejado atrás algunas ideas; además, se esforzaron en advertir del peligro y el desastre en el que se sumaría Perú si la carta presidencial de PL —un partido bastante *sui generis*, autodefinido como una “izquierda provinciana”— ganaba la segunda vuelta. Desde Mario Vargas Llosa a Iván Duque o Guillermo Lasso apoyaron a Fujimori. Esta prometió que respetaría la separación de poderes mientras la justicia iba estrechando su cerco contra ella por varias imputaciones. Castillo, por su parte, firmó un acuerdo con Verónica Mendoza que fue importante para su futura victoria y, sobre todo, para habilitar la incorporación a su equipo técnico y a sus vocerías de cuadros de izquierda urbana con prestigio, buscando bajar el temor de que votar por Castillo era una suerte de suicidio nacional. También lo apoyaron referentes de la izquierda regional como Evo Morales o Luis Inácio Lula Da Silva. La segunda vuelta peruana se volvió un asunto de interés y activismo regional.

El 6 de junio fue la segunda vuelta en la que se impuso Pedro Castillo por un mar-



gen ajustado: 50,12% frente a 49,87% de Keiko Fujimori. Otra vez, la hija del ex-presidente Alberto Fujimori perdía por la mínima. Esa misma semana, Keiko Fujimori y la derecha local siguieron un guion de peligrosa actualidad: denunciar fraudes inexistentes en lugar de reconocer derrotas. Lo hizo Trump, y Bolsonaro ya ha advertido contra fraudes futuros en su contra. También, como ocurrió en Bolivia en 2019, se arengó a los militares a salir a la calle. El excandidato presidencial, Alfredo Bernachea, reclamó la constitución de un nuevo gobierno “cívico-militar” para que hiciese unas nuevas elecciones: “...un gran Gobierno de transición nacional para hacer unas nuevas elecciones generales limpias, sin fraude, porque el Perú no se va a rendir al comunismo” (El Nuevo Diario, 2021). La presión escaló y apuntó a derrocar a Sagasti, quien logró, finalmente, resistir el embate y entregó el mando a Pedro Castillo a finales de julio, tras un conteo de votos en el que la autoridad electoral mantuvo la templanza en medio de las movilizaciones fujimoristas.

A pesar de las expectativas depositadas, el gobierno Castillo no logró, en sus primeros seis meses, responder a las demandas sociales. Se pueden señalar tres aspectos importantes que explican el porqué de esta parálisis: el estado de la calle, la ofensiva del Congreso y las disputas en el interior del bloque oficialista. Aunque el descontento entre la ciudadanía peruana con la manera de hacer las cosas durante los últimos años estaba extendido, el país no vivió ningún ciclo de movilizaciones —las de noviembre de 2020 se revelaron como coyunturales, más que como la mecha de algo de mayor envergadura—; el malestar no está organizado ni tiene una

agenda de reivindicaciones movilizadora. Es decir, Castillo no es, como sí ocurre en Chile, o como ocurrió en 2005 con Evo Morales, un presidente surgido de la fuerza de una victoria de la calle que luego se traslada a las urnas. Una de sus banderas principales fue la de cambiar la Constitución, una demanda similar a la de las movilizaciones chilenas, pero sin la fuerza social que esta concitó en el país vecino. De hecho, el Congreso, en su camino ascendente de pugna contra Castillo, limitó a finales de 2021 el margen del ejecutivo para realizar consultas populares, y el gobierno fue incapaz de lograr los votos necesarios para evitar esta derrota que afecta a una de sus promesas. El Congreso no ha cesado en su batalla estos meses, llegando incluso a provocar escándalos internacionales —como el que ocurrió por la visita a España de su presidenta, María del Carmen Alva— y a sacar adelante normas que corren en un camino distinto a los planes del ejecutivo.

Pero el motivo más importante para explicar esta parálisis es la creciente puja interna en el propio bloque de poder, que ha terminado por dificultar el desarrollo de una agenda de gobierno clara. En su condición de independiente, Castillo no ha tenido una relación fácil con el partido por el que se presentó como invitado, Perú Libre, ni con su polémico líder, Vladimir Cerrón. A grandes rasgos, y con fronteras no del todo rígidas, son tres los grupos políticos con los que Castillo gobierna en una relación de equilibrios cada vez más precaria: el núcleo de dirigentes de PL; personalidades de izquierda independiente o con vinculación con Verónica Mendoza, de matriz más urbana y notablemente representados en el gabinete de



ministros; y su entorno más directo, donde se juntan algunos familiares o antiguas amistades con el grupo cada vez más poderoso de asesores. Este grupo se compone en buena medida de figuras políticas de segunda línea, algunas con viejas relaciones con Vladimir Cerrón, pero con un recorrido tan dilatado como no exento de polémicas. Las pugnas entre ellos han sido la tónica desde el inicio, y cuanta más intensidad han adquirido, más errática ha sido la ruta del gobierno de Castillo.

En estos pocos meses son ya cuatro los gabinetes que Castillo ha formado. No hay que olvidar, además, que el premier y el gobierno de turno deben buscar el voto de confianza del Congreso y, tanto por la hostilidad de la parte conservadora congresal, como por la creciente improvisación de Castillo, le cuesta cada vez más obtenerla. En el primer gabinete, Cerrón logró colocar a su hombre de confianza, Guido Bellido, como premier, además de obtener algunas carteras, pero varias otras quedaron en manos de figuras de izquierda con un perfil más bien de gestión, algunos leales a Mendoza, otros más independientes. Cerrón y Bellido, apoyados por la mayoría del grupo parlamentario de PL entraron en pugna abierta y pública con los ministros que no eran orgánicos, y pronto ellos mismos reactivaron el mote de “izquierda caviar” para atacarlos. La tensión política fue subiendo e incluso desde el grupo parlamentario se emitían comunicados y advertencias contra cargos del ejecutivo. Además, Bellido y Cerrón transmitían en público la idea de una especie de cogobierno con Castillo que no tardó en incomodar. Esto llegó al punto de quiebre con la destitución de Bellido, que vino acompañada no solo del cambio

de varios ministros de la órbita de Cerrón y una mayor incorporación de figuras de izquierda con prestigio —como el exfiscal Avelino Guillén que fue a Interior, en lugar del abogado de Cerrón—, sino de la fractura del grupo parlamentario: una mayoría se quedó con el jefe de Perú Libre, la otra se alineó con Castillo.

El nombramiento de Mirtha Vásquez como premier pareció indicar que Castillo se había decantado en favor del grupo más ubicado en la izquierda, con una imagen de buena gestión pública y de clave más urbana. Sin embargo, el grupo de asesores, entre los que figuraban personas como Roger Najar, el diputado Guillermo Bermejo o el subsecretario del despacho presidencial Beder Camacho, fueron acumulando poder y concentrando las decisiones. La caída del gabinete Vásquez —precipitada por la renuncia del ministro Guillén, que buscó, sin conseguirlo, el respaldo del presidente en su pelea contra mandos policiales con acusaciones de corrupción— reveló, por declaraciones de la propia Vásquez, o del exministro de Economía Pedro Francke, el aislamiento de Castillo y la pérdida paulatina de poder de su gabinete en favor de esa suerte de comité paralelo de asesores. Parece así que se acumuló una decepción más entre los que votaron pensando en el cambio político. El escritor peruano Juan Manuel Robles, luego de la renuncia de Avelino Guillén, escribió: “Temíamos fuera un Ollanta 2.0. Resulta que es un Ollanta 0.2. Mal”. Además, las acusaciones de corrupción, o al menos de solapamiento de la misma, no han sido marginales en las declaraciones de quienes fueron cesados con la caída del gabinete Vásquez. Verónica Mendoza ha explicitado el



alejamiento de su frente político, señalando que no participarían de un nuevo gabinete del presidente. Desde este espacio también se recibió con duras críticas el reemplazo propuesto de Mirtha Vásquez por el congresista Héctor Valer. Este, conservador, y con acusaciones de violencia contra su esposa e hija, duró solamente tres días como premier, lo que agudizó la crisis política. La ruptura entre Castillo y dicho espacio no tiene vuelta atrás.

El gabinete de ministros que se presentó junto al fracasado premier Valer evidencia ya un giro, moderado, hacia la derecha, con nombres como Oscar Graham en Economía, un perfil tecnócrata con una larga experiencia en las instituciones económicas estatales. Dimitido Valer, Castillo desplazó al ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien se ha convertido en el nuevo premier. Vladimir Cerrón recupera poder de manera notable con algunos afines en distintas carteras. El nuevo gabinete también incluye nombres vinculados a distintos partidos, conformando así, como señalaban algunos comentaristas, un gobierno que busca evitar la vacancia: es decir, intentar con estas cuotas lograr el respaldo necesario para que la repetida amenaza de la vacancia no logre fácilmente sumar votos en el Congreso. El cambio de Hernando Cevallos en Salud ha sido duramente cuestionado, no solo por la buena valoración que tenía este ministro, sino por el abultado expediente de polémicas que trae su nuevo responsable, Hernán Condori, hombre muy cercano a Cerrón. Este gabinete obtuvo el respaldo del Congreso el 9 de marzo, por 64 votos a favor contra 58, además de un par de abstenciones. Sin embargo, su an-

dadura no está siendo sencilla. A las fuertes críticas contra Condori se suman, entre otros puntos de tensión, la pelea creciente entre Graham y el cerronismo que alcanzó un punto máximo por la pelea entre Economía y Minas a propósito del respaldo a la gestión de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petropetrú. Graham, como miembro de los accionistas de la empresa petrolera, decidió presionar por la dimisión de Chávez, faltando a la junta. Esto provocó la caída del gerente general de empresa y la salida de figuras como Guido Bellido a exigir que Graham abandone el gabinete de Castillo.

Por otro lado, el propio presidente Castillo se ha vuelto protagonista de una fuerte pelea con la Fiscalía por investigaciones de corrupción contra su entorno y algunos empresarios —entre ellas, Karelim López— con los que el presidente mantuvo reuniones. Castillo, quien ha llegado a denunciar internacionalmente un intento de golpe de Estado, todavía no ha logrado salir de esta polémica de manera satisfactoria, aunque hay muchas dudas, según diversos analistas, sobre si finalmente tiene alguna responsabilidad directa en este caso. Esta polémica fue el último motor para el más reciente intento de vacancia presidencial, votado el 28 de marzo.

Esta nueva ofensiva de la oposición a Castillo se saldó con un notable fracaso: 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones; muy lejos de los 87 votos necesarios para hacer efectiva la vacancia. Cabe apuntar que apenas dos semanas atrás, el 14 de marzo, 76 fueron los votos a favor de la admisión del debate de la vacancia. Es decir, se puede comprobar

que el objetivo que varios observadores señalaban como explicación de la composición de este nuevo gabinete, evitar la vacancia, se ha cumplido.

A pesar de superar este trance, el escenario por venir no es sencillo, de hecho, todo apunta a que será más complejo que el transcurrido hasta ahora. El desgaste institucional, fruto de la pelea incensaste, es compartido entre el poder ejecutivo y el Congreso. La práctica ausencia de ac-

ciones políticas de calado y el enrarecimiento del clima social —lo último, la reciente y repetida polémica por el indulto a Fujimori— no permiten proyectar escenarios muy alentadores a corto plazo. Tampoco se atisba que el presidente Castillo quiera dar un giro a este rumbo. Pocos dudan que el recientemente fracasado intento de vacancia vaya a ser el último.

Conclusiones

- Las victorias electorales no son un indicador suficiente para hablar de un segundo ciclo progresista en la región. Pedro Castillo se aleja de lo que en principio parecía representar y su caso no es una excepción en la historia política reciente de la región: la victoria de Lenín Moreno se celebró inicialmente en la izquierda bolivariana como señal de fortaleza de estos proyectos, pero Moreno no tardó en dar un giro radical a sus posiciones internas y de política exterior. En la vereda contraria, Álvaro Uribe entregó el poder a Juan Manuel Santos confiándole que cuidase su legado, encarnado en los tres famosos huevos: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Pero antes de que acabase el primer mandato de Santos, en actos públicos en los que enseñaba una cesta con tres huevos rotos, Uribe ya le reclamaba que: “Los quebraron. No quedaron ni para (hacer una) tortilla”. Por lo tanto, un hecho electoral no es suficiente para sostener afirmaciones ideológicas rotundas. Cabe añadir, reforzando este argumento, que, precisamente desde la izquierda, se sostiene que ganar las elecciones no es sinónimo de ganar el poder.
- El posicionamiento respecto a Venezuela y a EE.UU. es otro elemento a considerar. Es cierto que Castillo instruyó que Perú se retirase del Grupo de Lima, poniendo así un epíteto simbólico a esta iniciativa, que solo sirvió para intentar disimular el seguidismo a las políticas estadounidenses sobre Venezuela. Pero también es verdad que pasó de tener como primer canciller a Hugo Béjar —un intelectual conocido por sus posiciones críticas con EE.UU. y la denuncia de su injerencia en el país—, a recuperar al canciller de Toledo, Oscar Martua, quien, en su segunda semana en el cargo, promocionaba profusamente la ratificación del convenio de Perú con la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), recibiendo críticas desde la izquierda por ello. Además, nombró como embajador en la Organización de los Estados Americanos (OEA) a Harold Forsyth, diplomático de carrera y padre del excandidato presidencial que fue competidor de Castillo, George Forsyth (difícilmente identificable con la izquierda), y no ha acompañado las críticas contra Luis Almagro que promueven Argentina, México y Bolivia.

- Gabriel Boric ha criticado con dureza al gobierno de Nicolás Maduro quien, por otro lado, mantiene una firme alianza con Bolivia, Cuba y Nicaragua, y una buena relación con México y Argentina. Las diferencias que plantea Boric no parecen menores ni coyunturales. El posicionamiento respecto a Venezuela tiene condiciones para ser un elemento importante a la hora de pensar en qué momento se encuentra la región.

- Existe una clara coincidencia de Boric y Castillo en apostar por la Alianza del Pacífico. Resulta llamativo que este espacio, que en sus inicios parecía más una contrapropuesta ideológica conservadora a Unasur, finalmente haya logrado mantenerse vigente y que ahora, cuando varios de sus países miembros han pasado a estar dirigidos por gobiernos de izquierda, no le hayan supuesto una crisis.

De hecho, Castillo, en la Cumbre que mantuvo la Alianza el 26 de enero de 2022, fue muy claro al expresar su satisfacción de que su país sea parte de este espacio. Cuando Piñera invitó a Boric a acompañarlo en sus últimas semanas de presidente a las reuniones de la Alianza, precisamente a la Cumbre mencionada, así como a un encuentro de Prosur, el presidente electo fue rotundo al desahuciar Prosur como un mero artefacto ideológico, tanto como claro al valorar positivamente la Alianza del Pacífico.

- Algo que añade nueva complejidad a este punto es que, si bien durante el ciclo progresista de inicios de siglo la cuestión de Venezuela podía enmarcarse como una disputa ideológica y un posicionamiento de las élites, ahora hay una nueva dimensión que complejiza el escenario. La masiva migración venezolana a Perú y Chile desde 2017 introduce un fuerte peso en clave de política interna y de definición de sus gobiernos sobre la política en relación a Venezuela.

- Para cumplir de buena manera lo que el nombre de “ciclo” significa, se precisa de cierta duración en el tiempo. Boric y Castillo tienen la posibilidad de ser reelectos, pero sus respectivas normativas establecen que sea de manera no consecutiva. Si bien en los casos de Chile y Perú nada prohíbe, como es lógico, que sus respectivos partidos puedan presentarse nuevamente y poder dar así continuidad a lo hecho, no parece sencillo dadas las propias características, bastante nuevas, de esos espacios políticos, de hecho aún en definición.

Además, tanto el gobierno de Boric como el de Castillo se han ampliado, incorporando sectores más moderados respecto a sus planteamientos de partida. Todo esto es bastante distinto a lo que ocurrió en el primer ciclo progresista en la región, en el que las presidencias de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil y Cristina Fernández en Argentina fueron extensas, y todas duraron, al menos, dos periodos seguidos, estando ideológicamente bastante ubicadas a la izquierda del tablero.



- Para hablar de “ciclo” también es necesario que exista una relevante convergencia de los intereses y coincidencia en las acciones. Sin embargo, la crisis económica y la pandemia han dejado un escenario muy complicado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alertaba en enero de 2022 del aumento de la pobreza extrema en toda la región; la pandemia ha mostrado las debilidades de los sistemas de salud y crece la desafección con la política. Las sociedades se encuentran altamente polarizadas y expresan fuertes reclamos en clave nacional. Si la pandemia hizo que los Estados interviniesen con mayor fuerza en las regulaciones habituales y determinaron, temporalmente y por necesidad, regulaciones extraordinarias, ahora el reclamo de vuelta a la normalidad se hace en clave de vuelta a la normalidad nacional.

La exigencia de que llegue ya la recuperación económica no parece propiciar el mejor momento para la integración, que siempre lleva de la mano cierta idea de que no todo debe ser leído desde el prisma de los buenos resultados para la nación propia. Un indicador de la situación de casi inexistencia de espacios y organismos de integración regional ha sido la ausencia de iniciativas colectivas, con la notable excepción de las acciones bilaterales emprendidas entre México y Argentina y, por supuesto, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), pero como foro útil de discusión y coordinación de mínimos más que como espacio de integración. Así, mientras más falta han hecho los espacios de decisión y coordinación regional, la exigencia ciudadana se ha presentado en términos de respuestas inmediatas en clave nacional.

Referencias bibliográficas

- BBC (2019): “Protestas en Chile: la controversia después de que la primera dama Cecilia Morel comparase las manifestaciones con ‘una invasión alienígena’”, 23 de octubre. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50152903>.
- (2022): “Gabriel Boric, presidente electo de Chile. ‘No espero que las élites estén de acuerdo conmigo, pero sí que dejen de tenernos miedo’”, 21 de enero. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60083855>.
- CANELAS, M. (2021): “La CELAC: un foro útil para el mientras tanto”, *El País*, 12 de octubre.
- COOPERATIVA.CL (2019a): “Presidente Piñera: ‘Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada’”, 9 de octubre. Disponible en: <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-pinera/presidente-pinera-chile-es-un-verdadero-oasis-en-una-america-latina/2019-10-09/063956.html>.
- (2019b): “Convergencia Social aplicó ‘amonestación privada’ a Boric por firmar acuerdo constitucional”, 24 de diciembre. Disponible en: <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/frente-amplio/convergencia-social-aplico-amonestacion-privada-a-boric-por-firmar/2019-12-24/041131.html>.
- CORNEJO, C. (2022): “Sharp critica gabinete de Boric: ‘Pareciera ser que la alianza del gobierno ya no es Apruebo Dignidad’”, *La Tercera*, 28 de enero. Disponible en: <https://www.latercera.com/politica/noticia/sharp-critica-gabinete-de-boric-pareciera-ser-que-la-alianza-del-gobierno-ya-no-es-apruebo-dignidad/QL7HK3MW2REE5MAF2K3TZECHO4/>.
- EL NUEVO DIARIO (2019): “Excandidato pide ‘alianza cívico-militar’ para desconocer a Castillo en Perú”, 1 de julio. Disponible en: <https://elnuevodiario.com.do/excandidato-pide-alianza-civico-militar-para-desconocer-a-castillo-en-peru/>.
- GARCÍA LINERA, A. (2021): “La segunda oleada progresista latinoamericana”, *NODAL*, 30 de noviembre.
- GUZMÁN, J. A. (2021): “Juan Pablo Luna, politólogo ‘Boric no puede ser solo una especie de Concertación 2.0’”, *Tercera dosis* (26 de diciembre). Disponible en: <https://terceradosis.cl/2021/12/26/juan-pablo-luna-politologo-boric-no-puede-ser-solo-una-especie-de-concertacion-2-0/>.



- JAICO, C. (2022): “Pedro Castillo debería renunciar”, *El Comercio*, 9 de febrero.
- LA VANGUARDIA (2019): “Jefes militares dan su respaldo al presidente de Perú”, 1 de octubre. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/politica/20191001/47753530920/jefes-militares-dan-su-respaldo-al-presidente-de-peru.html>.
- LAGOS, R. (2021): “Lo que es mi historia, mi pasado, obviamente tengo que decir Boric”, *La Tercera*, 24 de noviembre.
- LEÓN, M. I. (2021): “Estamos ante una ola estatista que me recuerda a Velasco”, *Diario Correo*, 4 de febrero.
- MÉNDEZ, C. (2000): “Incas sí, indios no: apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú”, Instituto de Estudios Peruanos.
- MORENO BERROETA, L. (2021): “Gabriel Boric: ‘Nos bajamos del árbol y estamos en el territorio con los chilenos y chilenas que quieren seguridad para vivir en paz’”, *diarioUchile*, 23 de noviembre. Disponible en: <https://radio.uchile.cl/2021/11/23/gabriel-boric-nos-bajamos-del-arbol-y-estamos-en-el-territorio-con-los-chilenos-y-chilenas-que-quieren-seguridad-para-vivir-en-paz/>.
- PATRIAU, E. (2021): “Cecilia Méndez: ‘La reacción histórica del conservadurismo de la élite está empujando a una radicalización’”, *La República*, 27 de junio. Disponible en: <https://larepublica.pe/elecciones/2021/06/27/elecciones-2021-cecilia-mendez-la-reaccion-historica-del-conservadurismo-de-la-elite-esta-empujando-a-una-radicalizacion-pltc/>.
- PÉREZ GODOY, F. (2021): “El pensamiento político de Jaime Guzmán en la formación cívica de los chilenos en dictadura”, *Cuadernos de historia* # 54 (junio).
- PERÚ 21 (2019): “María Antonieta Alva, ministra de Economía: ‘El gran problema del Perú es que aún la gente no vale lo mismo’”, 3 de noviembre. Disponible en: <https://peru21.pe/politica/maria-antonieta-alva-ministra-de-economia-el-gran-problema-del-peru-es-que-todavia-la-gente-no-vale-lo-mismo-noticia/>.
- RETAMAL, M. (2020): “Segundo ciclo progresista en América Latina”, *De Frente Revista*, 21 de octubre.
- ROJAS, R. (2022): “Preguntas al nuevo ciclo progresista”, *El País*, 17 de enero.
- RPP NOTICIAS (2016): “Verónica Mendoza llama a votar por PPK en quechua”, 2 de junio. Disponible en: <https://rpp.pe/politica/elecciones/veronica-mendoza-llama-a-votar->

por-ppk-en-quechua-noticia-967731.

RTVE NOTICIAS (2021): “Coronavirus. Muertes por COVID-19 en el mundo: ¿Qué país cuenta con más fallecidos por habitante?”. Disponible en: <https://www.rtve.es/noticias/20210604/paises-muertos-coronavirus-poblacion/2012350.shtml>.

STEFANONI, P. (2021): “Las nuevas derechas en América Latina: si Pinochet estuviera vivo votaría por mí”, *El País*, 17 de noviembre.

TOHÁ, C. (2020): “Chile o el vértigo del futuro”, *Revista Nueva Sociedad* n° 286 (marzo-abril). Disponible en: <https://nuso.org/articulo/chile-o-el-vertigo-del-futuro/>.

VERGARA, A. (2019): “La historia del Perú es un cementerio de proyectos políticos”, *El Comercio*, 17 de noviembre.

Fundación Carolina, marzo 2022

Fundación Carolina
Plaza del Marqués de Salamanca nº 8
4ª planta, 28006 Madrid - España
www.fundacioncarolina.es
@Red_Carolina

https://doi.org/10.33960/AC_07.2022

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)